

Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintidós.

Vistos:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo, por sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en los antecedentes RUC 2.000.648.246-6, RIT 57-2021, condenó a Ariel Esteban Olivares Vásquez, a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio; a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena; y, al pago de una multa ascendente a diez unidades tributarias mensuales, como autor del delito de tráfico ilícito de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas en pequeñas cantidades, en grado de desarrollo consumado, sorprendido el 27 de junio de 2020, en dicho territorio jurisdiccional. Se le sustituyó la pena privativa de libertad por la reclusión parcial en modalidad nocturna.

Asimismo, condenó a Darwin Marcelo Olivares Torres, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor del delito de porte ilegal de arma de fuego, en grado de desarrollo consumado, perpetrado en la misma fecha y lugar. Se dispuso el cumplimiento efectivo de la pena.

En contra de dicho fallo, las defensas de los sentenciados dedujeron sendos recursos de nulidad, los cuales fueron conocidos en la audiencia pública del once de abril pasado, convocándose a los intervinientes a la lectura de la sentencia para el día de hoy, como consta del acta respectiva.

Considerando:



Primero: Que, el recurso de nulidad propuesto por la defensa de Olivares Vásquez se cimenta, de forma principal, en la causal contemplada en el artículo 373, letra a) del Código Procesal Penal, argumentando que, durante la tramitación del juicio y en la dictación de la sentencia se vulneraron los derechos o garantías constitucionales del imputado: el debido proceso y la igualdad ante la ley. En su concepto existe una inobservancia de las reglas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, cuestionando la forma en que el tribunal alcanza la convicción para la condena de su defendido.

Asimismo, denuncia una infracción al principio de congruencia, dado que — en su concepto— los antecedentes de cargo no guardaron relación con el ilícito objeto de la acusación y aquel que resultó acreditado por los sentenciadores del grado. En el mismo orden de ideas estima que se infringió la garantía de igualdad en la ley, en tanto existió un trato diferencial en la valoración respecto a la participación, la cual no se encuentra justificada de manera objetiva y razonable y, en base a lo anterior, existió una desproporción en la valoración de los medios de convicción, dado que debió ser condenado en base al tipo contenido en el artículo 50 de la Ley 20.000. En base a lo anterior, pide invalidar la sentencia y el juicio oral, a fin de realizar un nuevo juzgamiento ante tribunal no inhabilitado.

En subsidio, fundó el arbitrio recursivo en el motivo establecido en el artículo 373, letra b) del código adjetivo. Explica que no se verifica el tipo penal por el cual fue condenado dado que, para acreditar el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades se requiere ventas, las cuales no existieron y tampoco fue acreditado por los funcionarios civiles aprehensores, no acreditó ningún comprador, billetes de baja denominación, papelillos sumado a alguna actividad investigativa para acreditar el tipo penal del artículo 4° de la ley 20.000. En base a lo anterior es que pide la invalidación de la sentencia, dado que no se reconoció el



tipo establecido en el artículo 50 de la citada ley y, asimismo, pide la invalidación del juicio oral (SIC) a fin de desarrollar un nuevo juicio ante tribunal no inhabilitado.

Segundo: Que, la defensa del sentenciado Olivares Torres, de manera principal, funda el recurso en la causal contenida en el artículo 373, letra a) del Código Procesal Penal. Argumenta que, la afectación a la garantía de su defendido se produce en el esquema de actuaciones progresivas y resoluciones que desembocan en la condena del imputado.

Afirma que, en la declaración de los funcionarios policiales Jorge Cañete Álvarez y Patricio Díaz Salazar, fueron contestes en señalar que, previo al juicio, fueron preparados y se les entregó la documentación del parte policial, la cual incluiría todos los datos del proceso, dato aportado por el señor Fiscal de la causa. Expone que, dicha situación, fue minimizada por el tribunal el cual resolvió al momento de hacerse cargo de las alegaciones de vulneración del debido proceso, planteadas por la defensa.

De manera subsidiaria, invoca el motivo absoluto de invalidación contenido en el artículo 374, letra e) del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 297 del mismo cuerpo legal y los artículos 9 y 2, letra b) de la Ley 17.798. En primer lugar, denuncia una vulneración al principio de no contradicción. Afirma que, en el motivo sexto, existe una infracción a este principio, pues se ha establecido la existencia del ilícito de porte de arma de fuego sin que haya existido una certeza que el arma de fuego haya sido manipulada por su defendido, más aun existiendo prueba pericial realizada para establecer si existió manipulación. Del arma, esta fue la toma de residuos y el posterior análisis de las mismas por el correspondiente perito químico.

En segundo lugar, estima que se vulnera el principio de razón suficiente, pues en el mismo motivo sexto no existe la inferencia necesaria y lógica, pues,



pese a que la declaración del acusado fue conteste en explicar su falta de participación y que se pudo reafirmar en virtud de prueba pericial generada por las mismas policías al momento de detener al acusado Darwin Olivares —y luego olvidada por Fiscalía, pero si ofrecida por la defensa— la que daba cuenta y fundaba la versión del acusado de una falta de participación y que no poseía elementos de disparo en sus manos, los cuales deberían haber estado si se aceptaba la versión de Carabineros que concurrieron al lugar alertados por disparos injustificados.

Asimismo, el fallo omite la exigencia de fundamentación, pues, la correcta aplicación del derecho, respecto de los hechos probados en la causa, obtenida a través de la correcta valoración de la prueba, rendida en la audiencia de juicio oral, en la forma establecida en los artículos 295 y 296 del Código Procesal Penal, permitiría establecer —de conformidad a los conocimientos científicamente afianzados, reglas de la lógica y máximas de la experiencia— que no se encuentra acreditado la participación del acusado en el tipo penal de porte ilegal de arma de fuego, el tribunal, al considerar acreditado el hecho punible mediante testimonios contradictorios, ilógicos, inducidos y carentes de fiabilidad, ha afectado la valoración de la prueba, y condenado por el delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida, por lo que pide invalidar la sentencia y el juicio oral y se disponga la realización de un nuevo juicio oral.

Tercero: Que, la sentencia impugnada, en su motivo sexto, tuvo por acreditado que, *“...en horas de la mañana del 27 de junio del año 2020, en las afueras del Block L, en calle Eloísa Díaz 0782, departamento 11, funcionarios policiales sorprendieron a Darwin Marcelo Olivares Torres portando una pistola marca Glock, modelo 17 calibre 9x19mm, y además a Ariel Esteban Olivares Vásquez, quien mantenía en sus manos una bolsa transparente contenedora de*



marihuana, quienes ingresan al interior del referido inmueble, encontrando en la mesa del comedor la referida bolsa con un total de 153 gramos de cannabis sativa, dinero y 7 vainas percutidas, sin contar con las autorizaciones correspondientes”.

Estos hechos fueron calificados por el tribunal como constitutivos de los delitos de porte ilegal de arma de fuego de los artículos 9 y 2) de la Ley 17.798 y de tráfico ilícito de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas en pequeñas cantidades, en su conducta de porte, de los artículos 4 y 1 de la Ley 20.000.

Ahora, en relación a los puntos abordados en las causales de los recursos de nulidad, el fallo señaló en la misma motivación sexta que, “... *ambas Defensas repararon en la insuficiencia de la prueba de cargo pero, contrariamente a lo que postulan, ésta fue bastante, idónea, maciza, coherente y, en lo que se refiere a los funcionarios policiales, se trata de testigos directos de los hechos que pudieron apreciar por sus sentidos. Dieron razón de sus dichos, sus declaraciones no se oponen a los principios de la lógica ni a las máximas de la experiencia y guardan armonía con las fotografías expuestas, documentos incorporados, con la prueba pericial, incluso con aquella presentada por la Defensa de Darwin Olivares, en cuanto a la entrega de evidencias de interés criminalístico vinculados a la ley 17.798, además de pruebas para constatar posibles residuos de disparos en el cuerpo del acusado Darwin Olivares Torres.*

En torno al cuestionamiento de la prueba testifical, aun cuando el Cabo Patricio Díaz fue contrastado en ejercicio de la técnica del artículo 332 del Código Procesal Penal, para superar contradicción con una declaración que prestó el mismo día del procedimiento en la 62ª Comisaría de San Bernardo, en cuanto a que en esta última aparecería como el funcionario que hizo el levantamiento del



arma en el sitio del suceso, en circunstancias que tanto él como el Cabo Cañete dijeron en audiencia que de ello se encargó el jefe del procedimiento —Sr. Cañete—, lo cierto es que quedó claro ambos aparecen suscribiendo dicha declaración policial, de modo que no excluye a este funcionario de mayor rango, no se opone sustancialmente a la información incorporada a través de sus dichos en el juicio oral y, por último, a la luz del resto de la prueba de cargo incorporada, no se trata de una antecedente relevante que comprometa la credibilidad del Cabo Díaz.

Por último, en lo que se refiere a la infracción de garantías constitucionales, legales y vulneración de normas del debido proceso, no basta con su sola mención para entender que se han configurado.

En efecto, como se expuso en el veredicto de rigor, no se avizora un actuar no ajustado a derecho.

Tampoco se acreditó de modo alguno que en el actuar de los funcionarios que intervinieron en los primeros actos del procedimiento que dio origen a la investigación de los delitos por los cuales se acusó, se haya incurrido en conductas contrarias a la normativa legal vigente que los rige como uno de los organismos auxiliares del Ministerio Público, por mucho que se les preguntara si sabían de una denuncia en su contra.

De partida, y tratándose de la supuesta infracción de garantías fundamentales, no se señala cómo éstas habrían sido vulneradas y de qué manera se habrían visto afectado ambos o el acusado Ariel Olivares, como que por ejemplo se conculcara su derecho a tener una defensa letrada y oportuna, que se le hubiere atribuido el porte de droga distinta o en mayor cantidad a la incautada.

Ambos funcionarios ante la constatación de delitos flagrantes, ante la situación descrita por el artículo 130 a) del Código Procesal Penal, cumplieron con



su obligación al tenor de lo dispuesto en los artículo 83, 84, 125, 129 y 206 del mismo cuerpo legal, por cuanto no sólo se dio cuenta prontamente al fiscal de turno que autorizó diligencias probatorias en torno al acusado Darwin Olivares, sino que además ingresaron a un lugar cerrado ante el indicio de que en su interior podía procederse a la destrucción de instrumentos o elementos materiales vinculados a un delito, junto a la denuncia de un hecho que revestía dichas características, razones que necesariamente debían conducir a una intervención policial.

Por otro lado, como quiera que las funcionarias Cañete y Díaz manifestaron haber conversado entre ambos respecto de la declaración que iban a prestar en la audiencia, leyendo sus declaraciones policiales y el contenido del parte y, como lo expuso el Cabo Cañete, que se entrevistó con el Fiscal en su preparación del juicio, también indicó que su declaración es la misma del procedimiento y que “no se ha cambiado nada”. También señaló que no sabía que el acusado Darwin estaba privado de libertad, como si de saberlo ello podía contribuir a su reconocimiento en audiencia. De hecho, no fue contratado con su declaración prestada hace más de un año para los efectos de apoyo de memoria o superar contradicción.

El Cabo Díaz, a su turno, expuso que la preparación tiene que ver en sí con el procedimiento, las cosas que se incautaron, en definitiva con la actuación policial en la que él participó. Ninguno de ellos expuso, como lo sostuvo la Defensa de Ariel Olivares, que fueran preparados por el Ministerio Público e instruidos para declarar contra de los acusados, dejando entrever un actuar ilegítimo, imputación de la que debe hacerse cargo.

En cambio, resulta comprensible atendido el tiempo transcurrido y el número de procedimientos diarios similares al de esta causa, dos a tres, como lo



expresaron, que se proveyeran de la información necesaria para declarar en el juicio respecto de un operativo en el que les correspondió intervenir, lo que no descarta de modo alguno que no pudieran recordar algún un hecho lejano, cuya respuesta en este sentido se torna válida, por sobre la intención de llenar vacíos faltando a la verdad”.

Cuarto: Que, en relación a la causal principal propuesta por la defensa del acusado Olivares Vásquez, el recurso se construye sobre reproches que se vinculan con la ponderación de los elementos de convicción que desarrolla el tribunal del grado, más que con una vulneración de garantías fundamentales. En efecto, el primer reparo guarda relación con una infracción —al momento de valorar las evidencias— respecto de las reglas de la sana crítica y que, en tal proceso, se habría vulnerado la garantía de igualdad en la ley. Sin embargo, el articulista olvida que el legislador, para tal propósito, ha reservado el motivo absoluto de nulidad contenido en el artículo 374, letra e) del código adjetivo, en relación al artículo 342, letra c) del mismo cuerpo legal, de tal forma que cualquier reproche en la forma en la cual los sentenciadores materializaron la valoración probatoria, de acuerdo a dichas reglas, debió enderezarse a través de la causal prevista en la ley e idónea a tal propósito. Asimismo, dentro de la misma causal, se denuncia una infracción al principio de congruencia, el cual permite que la sentencia no exceda el contenido de la acusación, vicio para el cual el legislador también ha reservado un motivo absoluto de invalidación, contenido en el artículo 374, letra f) del Código Procesal Penal. Por estas razones, el recurso no podrá prosperar en su acápite primordial.

Quinto: Que, en lo que respecta al motivo de invalidación subsidiario contenido en el arbitrio deducido por la defensa de Olivares Vásquez, si bien de su texto se advierte que lo que se propugna sería la recalificación del tipo penal —



desde la figura del delito de tráfico ilícito en pequeñas cantidades del artículo 4° en relación al artículo 1°, ambos de la Ley 20.000, por la falta contenida en el artículo 50 del mismo cuerpo legal— y, en principio tal objeto resultaría coherente con la causal de nulidad propuesta — errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo—, de la atenta lectura del petitorio de recurso no logra entenderse lo pretendido por la defensa ya que se ha pedido la invalidación tanto de la sentencia como del juicio oral, en circunstancias que no se ha justificado, con ocasión de la causal impetrada, un vicio que afecte la validez del respectivo juicio. Huelga recordar que es el propio artículo 385 del código adjetivo el que regula la materia en estudio, de forma tal que la petición de realizar un nuevo juicio oral no resulta posible dado los términos expuestos, razón por la cual tampoco puede prosperar el arbitrio en este capítulo.

Sexto: Que, ahora corresponde analizar el recurso de nulidad formulado por la defensa de Olivares Torres. En síntesis, la causal principal de dicho libelo se funda en que se habría afectado la garantía fundamental del debido proceso, dada la preparación que habrían recibido los testigos de cargo, de forma previa al juicio oral, por parte del señor Fiscal. Esta causal supone, para su aceptación, una infracción sustancial producida en el procedimiento o en la dictación de la sentencia, de derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

La doctrina y jurisprudencia están de acuerdo en que la infracción de derechos o garantías debe ser sustancial, lo que implica que no toda vulneración determina automáticamente la nulidad del juicio oral y la sentencia, sino que ésta debe ser de tal entidad que comprometa los aspectos esenciales de la garantía, decisión que debe ser adoptada sobre la base del criterio de proporcionalidad. En otros términos, la afectación constitucional alegada debe perjudicar en forma



esencial el ámbito de derechos del recurrente y no ser de una importancia secundaria o que no tenga importancia alguna para él. (Horvitz-López, Derecho Procesal Penal Chileno, T.II, pp. 414-415).

Estas opiniones han sido compartidas por esta Corte en innumerables pronunciamientos pretéritos, al dictaminar que el agravio a la garantía del debido proceso debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrase, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso (entre otras, SCS N°s 1.237-2010, de 17 de mayo de 2010; y, 45.313-2021, de 4 de febrero de 2022).

Se ha expresado también que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento.

Séptimo: Que, el reproche efectuado por el articulista, sobre la base de la entrevista del señor Fiscal con los testigos funcionarios policiales, de forma previa a la realización del juicio oral, por sí sola no logra configurar el vicio propuesto. En primer lugar, dado que la prohibición establecida en el artículo 329, inciso sexto del código adjetivo debe ser circunscrita únicamente a la audiencia de juicio oral y su desarrollo, mas no a etapas previas a la materialización del mismo. Asimismo, la actuación reprochada en modo alguno permite demostrar que el testimonio brindado en estrado haya estado contaminado, ni mucho menos que no responda a hechos que los mentados testigos hubiesen podido percibir o advertir durante el



procedimiento policial que culminó con la detención de los imputados y con el levantamiento de la evidencia incriminada.

En ese orden de ideas, no se advierte que por el solo hecho de haberse reunido el señor Fiscal con los testigos, de forma previa a la realización del juicio oral e informarles sobre el objeto y contenido de aquello sobre lo cual serían interrogados en estrado se produzca una contaminación de su relato posterior o que el mismo no pueda ser ponderado por los sentenciadores del fondo, razón por la cual la causal en estudio será desestimada.

Octavo: Que, en lo que respecta a la causal subsidiaria invocada por la defensa de Olivares Torres, esto es aquella contenida en el artículo 374, letra e) del código de enjuiciamiento criminal, en relación al artículo 342, letra c) del mismo cuerpo de normas, que la defensa hace consistir en la vulneración a los principios lógicos de la no contradicción y de la razón suficiente, acorde a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, esta Corte ya ha señalado que toda sentencia criminal debe razonar y exponer los fundamentos en que se apoya, justificar la decisión adoptada, fijar los hechos y establecer el derecho aplicable. El cumplimiento de la obligación de motivación de la decisión significa elaborar una justificación específica de la opción consistente en tener algunos hechos como probados, sobre la base de los elementos de prueba obtenidos en la litis, con las garantías inherentes al juicio oral. Tal deber apunta no sólo a permitir la comprensión de la decisión, sino además a garantizar la actuación racional en el terreno de la determinación de las premisas fácticas del fallo (entre otras, SCS N° 92.094-2020, de 14 de septiembre de 2020).

La satisfacción de esta carga posibilita la fiscalización de la actividad jurisdiccional por los tribunales superiores mediante el ejercicio de los recursos procesales. Si el tribunal explica las razones de su resolución es posible controlar



si efectivamente la actividad judicial se ha desarrollado dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, es el resultado de la arbitrariedad. Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones judiciales no deben resultar de meros actos de voluntad o ser fruto de simples impresiones de los jueces, sino que deben ser el corolario de la estimación racional de las probanzas, exteriorizada como una explicación igualmente racional sobre las razones de la decisión de una determinada manera —y no de otra—, explicación que deberá ser comprensible por cualquier tercero, mediante el uso de la razón.

Tal comprensión se ajusta a la concepción racionalista o cognoscitivista, que entiende la valoración de la prueba como el proceso de determinación de la verdad o falsedad de las proposiciones sobre hechos conforme a las relaciones inferenciales que existen entre ellas y las pruebas disponibles (Cortés-Monroy, Jorge. “La valoración negativa como exclusión de la prueba ilícita en el juicio oral”, en *Ius et Praxis*, v. 24, N° 1, 2018, p. 663).

Noveno: Que, en este entendido, cabe destacar que la causal en estudio invocada por la defensa faculta al tribunal que conoce del recurso de nulidad para controlar si los jueces del grado, al valorar libremente las probanzas aportadas por los intervinientes, han contradicho los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Es decir, debe cautelarse que en el proceso de apreciación y valoración probatoria —efectuado por el tribunal del grado conforme a las reglas de la sana crítica—, no se sobrepasen los parámetros de ponderación que son inherentes a dichas reglas, no siendo suficiente en consecuencia, para anular un razonamiento, el sólo hecho de disentir del mismo.

Conforme a lo anterior, en el conocimiento del recurso de marras queda vedado en sede de nulidad efectuar una nueva valoración de los medios de



prueba, facultad que se encuentra radicada exclusivamente en el tribunal de la instancia.

Décimo: Que, de la lectura del fallo en revisión, se advierte que los jueces del fondo dieron estricto cumplimiento al deber de fundamentar su pronunciamiento, en cuanto se hicieron cargo de toda la prueba rendida; explicaron cuáles fueron las razones por las que arribaron a su decisión, haciendo una análisis pormenorizado de los medios de prueba aportados por los intervinientes, explicitando los motivos por los que prefirieron unas probanzas por sobre otras y, finalmente, dieron razón acerca del por qué estimaron del todo irrelevante, para el delito de porte ilegal de arma de fuego, las conclusiones de los informes periciales que determinaron que el acusado no presentaba residuos de disparo, como se logra apreciar de la lectura pormenorizada de la motivación sexta del fallo en estudio.

En efecto, lo razonado para desvirtuar la prueba y las argumentaciones de la defensa, en desmedro de su teoría del caso, no se traduce por sí solo, en una contravención a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, pues el fallo aportó los motivos y expresó con claridad cómo y por qué arribó a una determinada conclusión.

Undécimo: Que, en suma, sobre el tenor del recurso puede concluirse que lo que se intenta impugnar es la valoración de la prueba que hizo el tribunal y en base a la cual fijó los hechos conforme a los cuales calificó la participación del encartado en el delito de porte ilegal de arma de fuego, así como las razones que lo llevaron a desestimar las propuestas de la defensa. De esta forma, lo que destaca del libelo son ciertas contradicciones o insuficiencias que surgirían de un análisis individual de las probanzas; pero esas protestas sobre la apreciación, más propias de un recurso de apelación, carecen de la eficacia legal requerida para



configurar una causal de nulidad como la intentada, por lo que deberá ser rechazada.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 373 letra a), 373 letra b), 374 letra e), 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechazan** los recursos de nulidad deducidos por las defensas de los sentenciados Ariel Esteban Olivares Vásquez y Darwin Marcelo Olivares Torres, contra la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo y el juicio oral que le antecedió en la causa RUC 2.000.648.246-6, RUC 57-2021, los que, en consecuencia, **no son nulos**.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama.

N° 75.689-2021.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintinueve de abril de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

